



# **El impacto de las políticas públicas en la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana durante los años (2019-2024)**

Mayor (EJC) Carlos Andrés Silva Ardila

Capítulo de libro para optar al título profesional:

Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

2025

DATOS GENERALES	
<b>Nombre del estudiante</b>	: Mayor (EJC) Carlos Andrés Silva Ardila
<b>Identificación</b>	: 8486363
<b>Programa académico</b>	: Maestría en Estrategia y Geopolítica
<b>Tutor metodológico</b>	:
<b>Tutor temático</b>	: TC (RA) William Alfredo Sierra Gutiérrez
<b>Fecha de entrega</b>	: 11 agosto 2025
<b>Extensión</b>	: 10.076

#### DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este capítulo de libro fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este capítulo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

#### AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor no autoriza que este capítulo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

# **El impacto de las políticas públicas en la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana durante los años (2019-2024)<sup>1</sup>**

**The impact of public policies in the fight against drug trafficking on the Colombian-Ecuadorian border during the years (2019-2024)**

**Carlos Andrés Silva Ardila**

**Luis Carlos Riascos Cilima**

---

<sup>1</sup> Capítulo de libro resultado del proyecto de investigación “Estrategia militar en el siglo XXI desafíos, transformaciones tecnológicas y prospectiva para la defensa” del grupo de investigación “Masa Crítica” de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, categorizado en A1 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) y registrado con el código COL0123247. Los puntos de vista y los resultados de este capítulo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los de las instituciones participantes.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

**Resumen:** Este capítulo analiza el impacto de las políticas públicas aplicadas por Colombia y Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana entre 2019 y 2024, en el marco del narcotráfico, la migración forzada y la violencia transnacional. Se identifican fallas en la coordinación binacional, la debilidad institucional y el predominio de estrategias represivas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos, lo que ha intensificado la conflictividad social y ambiental en la región. El trabajo emplea un enfoque metodológico cualitativo, orientado a interpretar dinámicas complejas mediante el análisis documental y la revisión crítica de políticas, informes oficiales y estudios académicos. Se abordan temas como la migración forzada, la minería ilegal, la militarización del territorio, la seguridad humana y la gobernanza ambiental, proponiendo una visión integral y multinivel. Finalmente, se formulan recomendaciones para una respuesta estatal más efectiva, cooperativa y sostenible frente a los desafíos de seguridad y desarrollo en la frontera.

**Palabras clave:** Fuerzas militares; frontera Colombia-Ecuador; migrantes, narcotráfico, políticas públicas; seguridad.

**Abstract:** This chapter analyzes the impact of public policies implemented by Colombia and Ecuador on the Colombian-Ecuadorean border between 2019 and 2024, within the context of drug trafficking, forced migration, and transnational violence. It identifies flaws in binational coordination, institutional weakness, and the predominance of repressive strategies such as the forced eradication of illicit crops, which has intensified social and environmental conflict in the region. The paper employs a qualitative methodological approach, aimed at interpreting complex dynamics through documentary analysis and a critical review of policies, official reports, and academic studies. It addresses topics such as forced migration, illegal mining, territorial militarization, human security, and environmental governance, proposing a comprehensive and multilevel perspective. Finally, recommendations are made for a more effective, cooperative, and sustainable state response to the security and development challenges along the border.

**Keywords:** Military forces; Colombia-Ecuador border; migrants, drug trafficking, public policies; security.

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia

**Carlos Andrés Silva Ardila**

Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en Estrategia y Geopolítica Escuela de Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Especialización en Administración de Recursos para la Defensa Nacional, ESACE, Colombia. Especialización en Gerencia Integral de obras ESING, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0009-0008-9823-728X> Contacto: Carlos.silvaa@esdeg.edu.co.

**Luis Carlos Riascos Cilima**

Teniente Coronel (R) del Ejército Nacional de Colombia. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales Escuela de Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Especialización en Administración de Recursos para la Defensa Nacional, Centro de Estudios Militares, Colombia. Especialización en Conducción de Unidades Militares para la Seguridad y Defensa Nacionales, Colombia. Profesional en Psicología, Universidad Politécnico Grancolombiano, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. Estudiante Especialización Psicología Forense y Criminal Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia. <https://orcid.org/0009-0005-0649> Contacto: riascosl@esdeg.edu.co

## **Introducción**

La creciente prominencia de Ecuador y Colombia en la red transnacional del crimen organizado constituye un fenómeno reciente, aunque sus raíces pueden rastrearse décadas atrás. Desde la década de 1990, Ecuador ha funcionado como proveedor clave de insumos químicos necesarios para la producción de cocaína en Colombia. Sin embargo, durante mucho tiempo no se evidenciaron altos niveles de violencia ni luchas de poder entre organizaciones criminales por el control de las rutas del narcotráfico en este país andino.

Esta situación cambió radicalmente a partir del año 2023 y alcanzó un punto crítico en enero de 2024, cuando un grupo delictivo organizado (GDO) tomó por la fuerza las instalaciones del canal de televisión nacional TC Televisión en Guayaquil, tomando como rehenes a periodistas y trabajadores. Este hecho, ampliamente difundido a nivel internacional, marcó simbólicamente la entrada de Ecuador en una nueva etapa de violencia criminal de alto impacto. Según datos regionales, Ecuador fue clasificado como el país más violento de América Latina durante ese año.

El auge del tráfico de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana puede explicarse a través de tres factores interrelacionados: la creciente influencia de redes criminales internacionales, los enfrentamientos entre grupos delictivos locales y la relevancia estratégica de la logística y las cadenas de valor asociadas al negocio global de la cocaína. Las rutas del narcotráfico no solo se determinan por su geografía, sino también por el cálculo del riesgo, la eficiencia logística y la capacidad de soborno en distintos niveles del aparato estatal. La rentabilidad de la producción y transporte de cocaína depende, en gran medida, del número

de intermediarios involucrados y de la seguridad relativa de las rutas hacia los mercados del hemisferio norte.

Para comprender el ascenso de Ecuador y Colombia en la cadena de valor del narcotráfico, resulta útil examinar dos momentos clave en la historia reciente: el año 2000 y el 2016. El primero marcó el inicio del Plan Colombia, una estrategia nacional y binacional diseñada para combatir la producción y tráfico de drogas. Con apoyo financiero y logístico de Estados Unidos, el Plan Colombia fortaleció las capacidades militares y policiales del Estado colombiano para erradicar cultivos ilícitos, destruir laboratorios clandestinos y ejercer control territorial en zonas previamente dominadas por grupos armados ilegales.

Como parte de la “guerra contra las drogas”, esta política también expandió la interdicción marítima en el Caribe mediante el Comando Sur de los Estados Unidos. Para el año 2016, se habían invertido más de 141.000 millones de dólares en esta estrategia, de los cuales 10.000 millones provinieron directamente de Washington.

Sin embargo, el resultado más visible fue el desplazamiento geográfico de las actividades ilícitas hacia zonas de menor control institucional, especialmente en las regiones fronterizas. La represión en el centro del país llevó a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas y aliados. Esto fomentó la "fronterización" de la criminalidad, es decir, la expansión de economías ilícitas hacia áreas limítrofes como la frontera colombo-ecuatoriana (Idler, 2012), en busca de corredores de tránsito más discretos para los precursores químicos y la cocaína procesada. A esta dinámica se suma el desarrollo de redes logísticas más sofisticadas, que articulan actores criminales locales con mafias internacionales y redes de lavado de activos.

En paralelo, Ecuador y Colombia se han consolidado también como países de tránsito y acogida para migrantes, solicitantes de asilo y desplazados forzados. La crisis de seguridad en ambos lados de la frontera ha agravado la situación de estas poblaciones vulnerables, quienes enfrentan múltiples riesgos, entre ellos amenazas, explotación laboral, trata de personas y violencia sexual. Las condiciones de inseguridad estructural en zonas de frontera han contribuido significativamente al incremento de los flujos migratorios.

Comprender la actual crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Ecuador exige un enfoque amplio, que incorpore tanto factores estructurales como coyunturales. La inestabilidad política, la desigualdad social, la presencia de grupos armados ilegales y el debilitamiento institucional han configurado un escenario propicio para la expansión del crimen organizado. Es poco probable que esta dinámica cambie en el corto plazo. Las causas profundas que impulsan la migración en América del Sur, así como la persistencia de enfrentamientos por el control de economías ilegales, continuarán alimentando el desplazamiento forzado y el colapso de las capacidades estatales en zonas periféricas.

En este contexto, la presente investigación se propone abordar la siguiente pregunta: ¿Qué políticas públicas pueden implementarse para combatir el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana, fortaleciendo la gobernabilidad y el control territorial? Responder a esta interrogante es fundamental no solo para reducir los niveles de violencia, sino también para garantizar los derechos humanos, restablecer la seguridad humana en la región y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto y la criminalidad transnacional.

## **Metodología**

Este capítulo se desarrolla con una metodología y cuyo enfoque de la investigación es el cualitativo, porque describe las perspectivas o escenarios planteados en los datos analizados, facilitando incorporar o asociar la información un contexto específico (Herrera, 2008). El enfoque cualitativo le permite al investigador interpretar los puntos de vista y experiencias, acercarse a los acontecimientos y llegar a un nivel más conceptual acerca del problema de investigación planteado (Schettini, 2016).

## **Políticas públicas empleadas en los últimos 5 años por parte de los gobiernos sobre la frontera Colombo Ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico.**

La lucha contra la siembra de cultivos ilícitos y consigo sus impactos, sigue siendo un desafío importante en países afectados por conflictos armados como Colombia (Vanegas et al., 2022). Por su geografía Colombia históricamente se ha convertido en un importante centro de grupos narcotraficantes por su acceso al mar, la presencia de los ríos, y sus fronteras (Rincón, 2013).

Estas experiencias pueden moldear las percepciones frente a las estrategias de los últimos dos gobiernos en Colombia sobre los riesgos y oportunidades en la aceptación de sus políticas antidrogas (Salas et al., 2019). Colombia es considerada en la actualidad como uno de los países potenciales de producción mundial de hoja de coca, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (en adelante:

SIMCI) mostró que para 2020, el país contaba con un total de 154.000 hectáreas de cultivos de coca, (UNODC, 2021).

La producción y el tráfico de drogas se han entrelazado con la dinámica del conflicto armado interno de Colombia, grupos armados ilegales están involucrados en la producción y el comercio de drogas (Vargas, 2021), sin embargo, estos actores difieren en sus intereses, posiciones de poder y razones históricas para participar en esta economía ilícita.

El gobierno colombiano y las extintas FARC firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto en noviembre de 2016, ambas partes coincidieron en la complejidad y las diferencias entre los actores que participan en la producción y distribución de drogas. El acuerdo afirmaba proporcionar una solución a la producción y el tráfico de drogas, sin embargo, desde las primeras etapas de las conversaciones de paz, los principales supuestos del acuerdo fueron criticados debido a su "visión simplista de producción, procesamiento y uso de drogas" (Vargas, 2013).

El cuarto punto del acuerdo propuso la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (Equipo Negociador de Paz, 2016), el PNIS se basa en el desarrollo “seguro” y políticas de drogas centradas en la sustitución de cultivos, planteada como una estrategia novedosa, porque es la primera vez en la historia que una política de drogas y desarrollo surge de conversaciones de paz, involucrando a los cultivadores de coca desde las primeras etapas de su diseño. (Gutiérrez, 2019).

Contando con la voluntad de los coccaleros, los excombatientes de las FARC y el gobierno Nacional, el programa generó altas expectativas entre los coccaleros, si bien las políticas anteriores al 2010 dirigidas a erradicación de los cultivos ilícitos, priorizaban la

erradicación forzosa sobre la sustitución, el PNIS cambió estas políticas hacia la sustitución voluntaria (Gutiérrez, 2019). Algunos, académicos y organizaciones civiles coinciden en que después seis años de comenzar a implementar esta política, los resultados están muy lejos de sus objetivos iniciales (De los Ríos Jaramillo, 2020, Vélez, 2021) en lugar de transformar las opresivas relaciones de poder económico y político detrás de la producción de drogas (Vélez et al. 2022) el PNIS resultó ser un apéndice más de la política de erradicación, con las mismas limitaciones y problemas (De los Ríos Jaramillo, 2020).

Los debates de la última década sobre políticas de drogas y desarrollo en el país han girado en torno a la efectividad de las distintas estrategias aplicadas para reducir la producción de hoja de coca, esto debido a que los programas de sustitución y desarrollo alternativo han demostrado ser insuficientes para erradicar los cultivos ilícitos, y la erradicación forzosa no ha tenido éxito en la reducción de los cultivos de coca, cómo se ilustra la siguiente tabla 1.

Tabla 1. Momentos claves de las políticas de drogas y desarrollo en Colombia.

<b>Período (Años)</b>	<b>Momento</b>
2001	<b>Los Programas de Desarrollo Alternativo</b> tienen como objetivo crear una economía alternativa con una presencia gubernamental fortalecida, nuevas oportunidades de empleo y cambio social.
2015- 2017	La Corte Constitucional suspende la fumigación con glifosato por violar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del sur del país.
2016	<b>Firma del acuerdo de paz</b> e inicio de la implementación del cuarto punto de la agenda ‘Solución al Problema de las Drogas’ y arranque de los primeros pilotos del <b>PNIS</b> .

<b>Período</b> (Años)	<b>Momento</b>
2017	<b>Programas de Desarrollo Comunitario y Oportunidades Lícitas:</b> combinando estrategias para fortalecer las organizaciones comunitarias, mejorar los servicios públicos, acelerar el desarrollo socioeconómico y crear mecanismos de diálogo
2022	<b>Críticas a la guerra contra las drogas:</b> El gobierno elegido en junio de 2022 ha pedido repensar la política de drogas y abandonar el viejo paradigma de la guerra contra las drogas.

*Fuente:* Elaboración propia.

### **Diagnóstico entre estrategia de erradicación forzada vs sustitución voluntaria**

La erradicación forzada entendida como la eliminación del cultivo ilícito sin el consentimiento de los cultivadores, está justificada en el artículo 375 del Código Penal colombiano (Congreso de la República, 2000). Puede llevarse a cabo mediante fumigaciones aéreas con herbicidas y mediante operaciones militares sobre el terreno para arrancar los arbustos de coca de manera manual.

Colombia es el único país de la región andina que ha permitido el uso de sustancias químicas para reducir cultivos ilícitos (Grisaffi, 2016); para ello, el uso de aviones, helicópteros y drones para fumigar herbicidas (principalmente glifosato) sobre cultivos ilícitos fue la práctica más común, este tipo de alternativa demostró ser costosa e ineficiente (Ibáñez, 2021). Se ha señalado que esta estrategia es contraproducente ya que las áreas erradicadas se reemplazan rápidamente con áreas recién cultivadas, lo que lleva a un resultado neto de suma cero (Reyes, 2014).

Otro aspecto importante, indica que las políticas de erradicación tienen enormes impactos ambientales, ya que conducen al desplazamiento de los cultivos de coca, la profundización de la deforestación y el daño a los ecosistemas (Rincón et al., 2016).

La erradicación forzada conduce a violaciones de derechos humanos (Forero, 2020). Frente a la aspersión, la Corte Constitucional (2017) suspendió su uso debido a la violación del derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas y el derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas. Aun así, desde 2018 el gobierno colombiano busco retomar la aspersión con glifosato como parte fundamental de su política antidrogas, a través de la formulación de la “Ruta Futuro” (MDN, 2018).

De 2018 a 2022, el gobierno ha priorizado métodos coercitivos como la erradicación manual sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz (Grupo Internacional de Crisis, 2021) aunque se vio opacada por la disputa de los grupos armados ilegales con la fuerza pública, hecho genero violencia y conflictos en los territorios donde se llevaban a cabo las operaciones.

El cambio de gobierno en 2018 marcó el reemplazo de la política de sustitución por la Ruta Futuro, que nuevamente prioriza la erradicación forzada sobre la sustitución voluntaria. El incumplimiento, retrasos en la sustitución y el aumento de los operativos de erradicación forzada, crearon tres grupos de personas vulnerables: los cocaleros que se oponen a la erradicación forzada y por tanto están siendo victimizados; quienes fueron impulsores del PNIS y ya no tienen garantías de cumplimiento y seguridad; y líderes locales que están construyendo propuestas de reconversión productiva pero que no forman parte del PNIS (Arenas et al., 2021).

Sin embargo, una vez firmado el Acuerdo de Paz, y ante el consiguiente incumplimiento del gobierno del PNIS, los cocaleros recurrieron a acciones de oposición y bloqueó a la erradicación forzosa, solicitando el cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno nacional (Bonilla et al., 2019). Ante las evidencias y hechos anteriores, el actual gobierno a través de La Política Nacional de Drogas de Colombia (2023-2033) “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” reconoce que, a pesar de los enormes esfuerzos emprendidos por más de medio siglo, no se han logrado las metas propuestas y en cambio se han generado efectos colaterales problemáticos para Colombia y el mundo.

La producción de drogas ilegales se encuentra en sus máximos históricos y la demanda mundial se ha incrementado; además, los grupos y redes criminales continúan controlando y expandiendo este mercado ilegal.

La nueva política antidrogas, se propone desplegar una estrategia integral de doble vía: por un lado, dar oxígeno a los territorios y comunidades que se han visto desproporcionalmente afectados por el mercado ilegal asociado a drogas, tales como las personas que por su condición de vulnerabilidad dependen de este mercado, así como quienes han sido estigmatizados y criminalizados debido a su consumo.

Por otro lado, asfixia para los nodos estratégicos del sistema criminal, que son los que generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita. Ambas estrategias deberán articularse con la agenda de construcción de paz como se ilustra en la figura 1.

**Figura 1.** Nueva política antidrogas 2023-2026



*Fuente:* elaboración propia

El objetivo que se plantea la Política Nacional de Drogas es contribuir a la consolidación de la paz y el cuidado de la vida, mientras avanza en la reducción de las vulnerabilidades asociadas al cultivo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas, así como del uso de sustancias psicoactivas, con el fin de disminuir los impactos negativos de las economías ilícitas, debilitar las organizaciones narcotraficantes y promover una regulación justa y responsable.

### ***Frontera colombo-ecuatoriana diagnostico en materia de seguridad***

Además, el conflicto armado colombiano ha provocado que ciudadanos colombianos y migrantes o refugiados acogidos en Colombia se desplacen hacia Ecuador. Entre enero y septiembre de 2023, 509 ciudadanos colombianos fueron desplazados forzosamente a la

provincia ecuatoriana de Esmeraldas, de los cuales las autoridades ecuatorianas reconocieron a 299 como refugiados. En el mismo período, 452 ciudadanos venezolanos fueron desplazados forzosamente a la misma provincia, de los cuales 21 fueron reconocidos como refugiados. Estas cifras corresponden a refugiados registrados y probablemente subestiman el número real de ciudadanos colombianos y migrantes acogidos en Colombia que se han trasladado a Ecuador. (ACAPS,2023)

A su vez, por su particular historia, la política antidrogas de Colombia está en constante evolución. En su incesante lucha contra el narcotráfico, la nación andina encontró en Estados Unidos un aliado clave. Para este último país, Colombia solía representar una gran amenaza, pues su clima era perfecto para la producción de marihuana, cocaína y heroína. Sin embargo, esta guerra contra las drogas ha sido extremadamente violenta para muchos civiles y consumidores, más que para los capos de la droga.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno y del apoyo de la comunidad internacional para poner fin al prolongado conflicto armado de Colombia, en el que participan el Estado, los grupos guerrilleros e ilegales, el país sigue sufriendo altos niveles de violencia, desplazamientos internos, asesinatos y secuestros. Hoy es esencial que la comunidad internacional apoye los esfuerzos del Gobierno de Colombia por fortalecer el Estado, la justicia social y el imperio del derecho. Aunque el tráfico de drogas que tiene lugar en Colombia no es la causa fundamental de los problemas sociales del país, sigue siendo evidente que la producción y el tráfico de drogas están alimentando el conflicto armado y poniendo en peligro la seguridad, la democracia y el desarrollo económico del país.

La evolución de la situación en Colombia se observa con preocupación en la región, y Ecuador y Venezuela son particularmente vulnerables a la propagación del conflicto

armado a sus regiones fronterizas y a la anarquía y la corrupción subyacentes al tráfico ilícito de drogas.

La frontera entre Colombia y Ecuador enfrenta una situación humanitaria compleja. La región comprende los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, como se presenta en el Mapa 1.

Mapa 1. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador



Fuente: ACAPS (19/12/2023)

El conflicto armado en Colombia y la violencia de pandillas en Ecuador, alimentada por las luchas por el control de las economías ilegales (como el narcotráfico y la minería ilegal), exponen a la población civil a graves incidentes de protección, entre ellos desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, homicidio selectivo contra líderes sociales, artefactos explosivos y violencia de género (ACAPS 2023).

En 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un acuerdo de paz. Este acuerdo redujo temporalmente los

niveles de violencia antes de que se reconfiguraran y aumentaran en los últimos años (Duvisac, 2023). Desde entonces, los desplazamientos, los confinamientos, la contaminación generalizada por minas antipersonal (MAP), las masacres (definidas en Colombia como el asesinato de tres o más civiles en el mismo incidente) y los asesinatos y amenazas contra candidatos políticos han seguido afectando a Colombia (Duvisac, 2023).

Nuevos grupos armados, en particular las disidencias de las FARC-EP, han estado ocupando y luchando por el control de las zonas que las FARC-EP abandonaron tras el acuerdo de paz. En 2018, las FARC-EP estaban presentes en 242 de los 1.100 municipios, principalmente en el sudoeste colombiano (Pares, 2018). Más recientemente, los enfrentamientos entre grupos armados nuevos y antiguos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las fuerzas armadas colombianas, han impulsado la violencia contra la población civil y han aumentado el impacto humanitario del conflicto. Los enfrentamientos entre estos grupos armados son las principales causas del desplazamiento y el confinamiento (OCHA, 2023).

Al otro lado de la frontera, la situación de seguridad en Ecuador también afecta gravemente a la población civil. Los enfrentamientos entre bandas criminales por el control del narcotráfico y otras economías ilegales han provocado un aumento sostenido de la tasa de homicidios en el país. En comparación con el año anterior, Esmeraldas tuvo la cuarta tasa de homicidios más alta de Ecuador en 2022 y la segunda más alta después de Guayaquil en 2023.

La población también enfrenta amenazas, extorsiones y un ambiente general de temor producto de las tácticas de las bandas criminales, como la exhibición pública de

cadáveres ahorcados y otros actos similares de intimidación. Estos actos violentos han contribuido a aumentar la propensión de la población local a migrar fuera del Ecuador.

### **Una mirada a la política antidrogas de Colombia**

En un principio, el Plan Colombia fue concebido por Estados Unidos y Colombia como un acuerdo que fortalecería la democracia y el Estado, ayudaría a las iniciativas de desarrollo, atacaría a los narcotraficantes y fomentaría la paz y los derechos humanos en la nación

Sin embargo, el Plan Colombia falló en el respeto a la integridad y los derechos de muchas personas a su paso. Una crisis humanitaria golpeó al país, lo que llevó a un éxodo masivo de colombianos en toda la región. Jorge Rojas, en su documento “Plan Colombia, conflicto armado y migraciones forzadas”, cubre algunas de las violaciones de derechos humanos en la región del Chocó. Estas incluyen ataques sistemáticos a la sociedad civil, violaciones de mujeres indígenas, homicidios colectivos, amenazas a líderes locales y más.

A pesar del fracaso humanitario del Plan Colombia, el gobierno continuo con un enfoque similar centrado en erradicar a los narcotraficantes y capos. Según el informe ejecutivo presentado por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) , el plan hasta 2022 se centró en cinco ejes principales: reducción del consumo de sustancias psicoactivas, reducción de la disponibilidad de drogas ilícitas, desmantelamiento de estructuras criminales, limitación de los ingresos de los criminales y un enfoque transversal en la mejora de la eficiencia de las políticas.

Sin embargo, la despenalización de las drogas está generando un debate cada vez más fuerte en la sociedad colombiana, lo que significa que también está generando más debate a nivel político. Es importante resaltar que el país andino cuenta con una tabla de posesión de drogas que permite a las autoridades diferenciar si una persona es consumidora o traficante de drogas. Esta tabla es un esfuerzo de política pública loable que puede allanar el camino hacia la despenalización de las drogas.

Sin embargo, las metas que se ha fijado el gobierno ofrecen una visión negativa de lo que está por venir. Pareciera que estamos a punto de vivir una guerra contra las drogas más dura, sin siquiera considerar el papel que juegan la educación, la reparación y la atención sanitaria pública en la reducción del consumo y el tráfico de drogas.

Afortunadamente, en el último año se ha hablado mucho sobre la legalización de la marihuana, lo que supone un gran paso adelante para mejorar la política antidrogas en Colombia, aunque lejos de la despenalización de las drogas. Es importante recordar que el uso del cannabis con fines médicos es legal desde 2016, y actualmente su uso recreativo está siendo discutido entre los responsables políticos y la sociedad. Avanzar hacia la legalización total del cannabis es un gran paso y puede ser crucial para el Estado, ya que aumentaría su recaudación fiscal. Este dinero podría destinarse a políticas subdesarrolladas en zonas rurales y a apoyar a los grupos más afectados por la guerra contra las drogas. Colombia podría convertirse potencialmente en un líder en la industria, lo que podría traducirse en mejoras nacionales como tasas de pobreza y desempleo más bajas.

Desde el marco analítico de las relaciones internacionales en la región fronteriza amazónica se distinguen dos fenómenos: (1) la dinámica informal de la vida cotidiana y (2) las prácticas ilegales. Debido a la expansión y consolidación de la ilegalidad, la seguridad

de los habitantes de la frontera colombo- ecuatoriana se ve amenazada. Medina y Ardila Calderón (2015) encontraron una fuerte influencia del conflicto armado interno en la región fronteriza colombiana y de la dinámica transnacional en Ecuador. En el área andina, los Estados actúan unilateralmente sin políticas de colaboración. La seguridad humana ha sufrido debido a esta falta de claridad. Las reacciones de los Estados a la actividad ilegal han fracasado, lo que ha resultado en esclavización política.

No obstante, las conversaciones de paz entre las guerrillas y el gobierno colombiano han creado una nueva forma de pensar sobre el fortalecimiento de la autoridad estatal y la construcción de vínculos sociales basados en la integración regional, la inclusión social y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

### **Análisis de las deficiencias en materia de políticas de seguridad y conflictos en la frontera colombo-ecuatoriana.**

El marco binacional Colombia-Ecuador enfrenta deficiencias en materia de políticas relacionadas con la sostenibilidad, la coordinación transfronteriza y la gestión de los cruces informales. Entre los desafíos se encuentran garantizar la eficacia a largo plazo de proyectos como el Proyecto Binacional de Adaptación, mejorar la comunicación y la cooperación entre ambos países, y abordar los problemas derivados de la permeabilidad de las fronteras y el posible contrabando, se podrían considerar como las falencias en el marco de las políticas desde contexto binacional las siguientes:

- ***Seguridad y conflicto:***

La región fronteriza no es inmune a los problemas de seguridad, como la presencia de actores armados no estatales y la posibilidad de que el conflicto se extienda. Es necesario

que las políticas públicas de la región se articulen con las políticas de integración regional para abordar estas preocupaciones eficazmente.

- ***Desarrollo económico y desigualdad:***

La región fronteriza enfrenta disparidades económicas, con algunas zonas con mayores niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. El comercio fronterizo, si bien es una fuente de ingresos, puede verse afectado por actividades ilegales como el contrabando, lo que genera inestabilidad económica y desigualdades.

- ***Desafíos ambientales:***

La región también enfrenta desafíos ambientales, como la deforestación y los impactos del cambio climático, que requieren acciones coordinadas y respuestas políticas.

- ***Crimen transnacional:***

La región fronteriza es vulnerable a la delincuencia transnacional, como el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las políticas públicas deben abordar estos problemas eficazmente, posiblemente mediante medidas de seguridad reforzadas y control fronterizo.

Estas deficiencias en materia de políticas, serán descritas al detalle a continuación durante el desarrollo del presente apartado de este artículo.

En Nariño y Putumayo, los impactos sobre la población civil han sido particularmente severos. Entre enero y septiembre de 2023, el desplazamiento masivo (definido en Colombia como eventos de desplazamiento que involucran a más de 50 personas a la vez) afectó más a Nariño, donde se produjo el 53% de todos los eventos de desplazamiento del país, afectando a 24.500 personas (Cajiao, 2022). En Putumayo, las emergencias humanitarias relacionadas con el conflicto armado aumentaron en 2023 en

comparación con años anteriores (OCHA, 2023). Por ejemplo, el número de personas desplazadas por la fuerza se multiplicó por siete, pasando de más de 430 entre enero y octubre de 2022 a 3.200 entre enero y noviembre de 2023.

El control de las economías ilegales impulsa los enfrentamientos entre los distintos grupos armados. La principal fuente de ingresos de estos grupos es el tráfico de cocaína, cuya producción se basa en el cultivo de hoja de coca, que realizan las comunidades rurales de Colombia y otros países. Además, el 77% del incremento de áreas dedicadas a cultivos de coca se concentró en el departamento de Putumayo. Tumaco en Nariño y Puerto Asís en Putumayo en la región fronteriza son dos de los municipios con mayor superficie dedicada a cultivos de coca (UNODC, 2023).

La minería ilegal también forma parte de las fuentes de ingresos de los grupos armados de la zona. Las autoridades colombianas estiman que los grupos armados ganan entre dos y tres mil millones de dólares anuales gracias a la minería ilegal de oro en el país. La mayor parte de la explotación de oro aluvial (es decir, oro extraído de los sedimentos del suelo dejados por los flujos de agua) en Nariño (más del 70%) y Putumayo (más del 90%) es ilegal. Las zonas donde se realiza la explotación ilegal de oro aluvial coinciden en gran medida con tierras de cultivo de coca, 95% para Putumayo y 66% para Nariño (UNODC, 2022). Dado que los grupos armados controlan las zonas con cultivos de coca, esta coincidencia sugiere un control similar sobre la minería ilegal.

Otro factor clave de la violencia en ambos lados de la frontera son las luchas entre bandas criminales en Ecuador por el control del tráfico de drogas procedente de Colombia. La desmovilización de las FARC-EP, que tenían el monopolio del tráfico de drogas en la zona fronteriza, abrió un vacío para otros grupos que comenzaron a luchar por su control.

Entre estos grupos se encuentran las bandas locales ecuatorianas y las mafias mexicanas (incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y albanesas, que han reclutado a agentes locales para enviar cocaína a Europa (CFR 14/06/2023)

Los factores clave detrás de la crisis de seguridad de Ecuador son el aumento de la producción de cocaína proveniente de Colombia, la fragmentación de las bandas criminales, la participación de organizaciones criminales extranjeras (principalmente de Colombia y México) y la debilidad institucional del Estado ecuatoriano en materia de seguridad. En la zona de frontera hay una importante presencia de comunidades indígenas, que se encuentran entre las más afectadas por hechos violentos. También hay una importante población étnica afrocolombiana, mayoritariamente en los departamentos de Nariño y Putumayo. El 15,5% de la población de Nariño y el 17,9% de la de Putumayo se autoidentifica como indígena, mientras que el 17,5% de la población de Nariño y el 3,6% de la de Putumayo se autoidentifica como afrocolombiana (DANE 2019-2021).

La comunidad indígena Awá se encuentra entre las poblaciones con mayor riesgo de violencia armada, ya que habita en algunos de los municipios más afectados por el conflicto en Nariño y Putumayo y en el norte de Ecuador. Además del conflicto armado, Colombia ha experimentado un aumento significativo de los movimientos migratorios mixtos, con personas que provienen principalmente de la vecina Venezuela, pero también de otros países, como China, Ecuador y Haití, siendo el departamento de Nariño un corredor principal. La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito por Colombia se dirigen hacia América del Norte. Hasta octubre de 2023, 238.000 personas habían ingresado a Colombia, 88.000 de manera regular y 150.000 de manera irregular (PGN, 2023).

Frente al contexto expuesto, se deduce que la inestabilidad política y los desafíos de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador también tienen un efecto importante en el desarrollo de la crisis humanitaria. Ambos países, viven una crisis de inseguridad provocada por las luchas entre bandas criminales por el control de las economías ilegales, con graves efectos en los indicadores de seguridad. Esta crisis de inseguridad afecta el flujo regular de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan desde Ecuador hacia Colombia e incentiva la migración adicional de ciudadanos ecuatorianos, ya sea dentro de Ecuador o hacia otros países, incluida Colombia.

Se estima que la frontera es el principal punto de entrada a Colombia para un 39% de los migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular. El municipio de Ipiales en Nariño es uno de los principales puntos de entrada. Las principales nacionalidades de los migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular (Migración Colombia, 2023). Entre ellos se encuentran migrantes venezolanos que regresan del sur del continente hacia Colombia, Venezuela y Estados Unidos; familias procedentes de Haití; y migración extracontinental procedente de países como China, Vietnam y varios países africanos (PGN, 2023).

Los grupos armados de ambos lados de la frontera se benefician de la situación migratoria ofreciendo servicios de contrabando, muchas veces a través de cruces irregulares. Las personas en movimiento están expuestas a la inseguridad y a los riesgos relacionados con el clima, incluidos homicidios, amenazas, extorsión, violencia de género y enfermedades como el dengue. Algunos migrantes y solicitantes de asilo son víctimas de explotación sexual para conseguir alimentos y otros medios de vida básicos.

También están expuestos a las redes de trata de personas en la zona, con riesgos especialmente altos para los niños. Entre 2022 y 2023, el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan por el Tapón del Darién se cuadruplicó, pasando de 21.700 a 88.600, lo que convierte a este grupo poblacional en uno de los más afectados. Los niños, niñas y adolescentes representan el 25% de los migrantes y solicitantes de asilo en América Latina y el Caribe (MMC, 2023).

La eficacia de las políticas públicas empleadas por los dos gobiernos sobre la frontera Colombo-Ecuatoriana ha buscado estabilizar esta área a pesar de la cantidad de fenómenos de criminalidad que se presentan a diario, es demasiado importante para nuestro país poder analizar si estos lineamientos establecidos realmente están siendo efectivos en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas se mueven sobre esta área, para poder llegar a determinar si se requieren cambios o ajustes a los procedimientos que están siendo empleados por la Fuerza Pública de ambas naciones o las diferentes instituciones.

#### ***limitaciones e implicaciones futuras***

La relación entre Colombia y Ecuador tiene una larga historia que comienza con la disolución de la Gran Colombia. Los aspectos económicos, políticos y culturales establecidos entre Ecuador y Colombia no corresponden solo a la proximidad geográfica de estos países, sino a los lazos que han existido entre ellos desde la época colonial (Almeida, 2011).

Desde que ambos se convirtieron en Repúblicas, y precisamente a partir de 1830, cuando se consolidaron sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, en los últimos años, las relaciones entre Ecuador y Colombia han adquirido una connotación diferente debido a fenómenos que perturban al país vecino del norte, como el narcotráfico y la violencia.

Muchos otros problemas relacionados con la frontera, como la violencia de pareja, los prejuicios, el conflicto vecinal, las bandas criminales. Si bien Ecuador no tiene una presencia significativa de coca en su territorio ni produce cocaína ni otras drogas ilegales, la frontera común juega un papel sustancial en estos asuntos. Por lo tanto, abordar la crisis fronteriza entre estos dos países vecinos es necesario.

En materia de violencia y cómo enfrentarla, es innegable la culpabilidad del gobierno ecuatoriano por no involucrarse en la formulación e implementación de propuestas integrales para el desarrollo de la zona de frontera y no limitar la variable militar en el marco de la seguridad nacional (Quiñónez, 2022). Los débiles sistemas de gobernanza estatal de Colombia son responsables de la mala gestión y la crisis en la región fronteriza entre Ecuador y Colombia. La distancia de las zonas fronterizas a los centros políticos y económicos del estado, así como su transnacionalidad, condicionan la vida en las zonas fronterizas y las hacen atractivas para grupos armados no estatales (Mouly, 2015).

La pandemia de COVID-19 ha añadido una tercera dimensión al problema de seguridad de Colombia, arraigado en el continuo conflicto armado y las crisis humanitarias del país (Idler, 2020). Si bien ambos gobiernos acordaron crear un fondo ante la crisis de COVID-19 en la región fronteriza, este no es suficiente. Por lo tanto, estudios futuros pueden abordar la crisis fronteriza entre Colombia y Ecuador durante la pandemia y la postpandemia. También deben estudiarse los problemas multidimensionales y las posibles crisis.

Tanto en Ecuador como en Colombia, los problemas políticos internos en ambos países generaron problemas fronterizos e migratorios. En ambos países, el poder del gobierno central no puede concentrarse, lo que propicia la proliferación de actividades delictivas violentas organizadas.

Desde la perspectiva de Colombia, existe una guerra civil de larga data en el país. Desde la perspectiva de Ecuador, este es el país con más pandillas. El aumento de los costos de gobernanza en las zonas fronterizas ha dificultado la solución del problema del crimen organizado, por lo que ambos países necesitan cooperar aún más.

En conclusión, el análisis de las deficiencias evidencia que la frontera colombo-ecuatoriana se mantiene como un espacio altamente vulnerable, donde la debilidad institucional, la escasa coordinación binacional y el dominio de economías ilegales profundizan la inseguridad. Superar estas limitaciones requiere políticas de seguridad con enfoque integral, capaces de articular control territorial, desarrollo económico y protección comunitaria. Sin este giro estratégico, las respuestas estatales seguirán siendo insuficientes frente a los retos transnacionales que enfrenta la región.

### **Recomendaciones a políticas que favorezcan la implementación por parte de las instituciones gubernamentales sobre la frontera colombo-ecuatoriana.**

Ecuador, con 18 millones de habitantes en 2022, era considerado un país relativamente estable. No obstante, en la última década ha atravesado múltiples crisis políticas graves, superando incluso a otros países andinos en términos de inestabilidad. Los tres últimos presidentes electos no lograron completar sus respectivos mandatos, lo que ha debilitado la democracia ecuatoriana y generado políticas económicas y gubernamentales impredecibles. Esta situación ha provocado una fragmentación institucional que impide la continuidad de proyectos a largo plazo.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las fuerzas del orden es asegurar la frontera con Colombia, una tarea compleja debido a las condiciones geográficas adversas, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, cubiertas en gran parte por selva tropical.

### **Relaciones bilaterales y violencia fronteriza**

Colombia y Ecuador han mantenido históricamente relaciones cordiales. Sin embargo, el incidente de Angostura a finales de los años 2000 provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países (Baca, 2011), deteriorando el clima bilateral. A pesar del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, persisten episodios de violencia en la frontera colombo-ecuatoriana (Xinhua, 2021).

La presencia y acciones de actores armados no estatales continúan afectando la seguridad ciudadana en esta zona. Según Idler (2014), la debilidad en la gobernanza estatal, el ambiente de alto riesgo, la impunidad y el papel de la región como corredor del narcotráfico fomentan no solo la violencia física, sino también formas más sutiles de inseguridad.

Cuando se producen enfrentamientos entre los grupos ilegales y las fuerzas estatales, la población civil queda expuesta a situaciones de violencia y debe adaptarse a las normas impuestas por los distintos grupos armados. Estas dinámicas han llevado a los responsables políticos a destacar la amenaza que estos actores representan para la seguridad nacional, señalando además la posibilidad de un “desbordamiento” del conflicto colombiano hacia países vecinos, como lo plantea la teoría del efecto vecindad (Idler, 2012). La incursión colombiana contra las FARC en territorio ecuatoriano generó una reacción predecible no solo de Ecuador, sino también de Venezuela (Fernandes, 2008). Este

tipo de acciones tensiona las relaciones regionales y debilita la cohesión social en comunidades fronterizas.

### **Migración forzada y deterioro del tejido social**

Las comunidades indígenas, especialmente aquellas asentadas en zonas de frontera, han sido particularmente afectadas. La presencia de grupos guerrilleros ha forzado su desplazamiento hacia territorio ecuatoriano, rompiendo su dinámica migratoria ancestral y su vínculo territorial (González, 2018). Ecuador ha tenido que asumir, en consecuencia, una carga humanitaria significativa, convirtiéndose en país receptor de refugiados colombianos que huyen de la violencia y el conflicto. Sin embargo, la resolución de las disputas bilaterales entre ambos gobiernos ha sido insuficiente, lo que hace urgente incluir este fenómeno como prioridad en la agenda binacional.

### **Contrabando, criminalidad y desequilibrios económicos**

El comercio fronterizo representa una fuente importante de ingresos económicos regionales, pero actualmente enfrenta regulaciones y restricciones debido al incremento del tráfico ilegal de bienes, como armas y drogas. Esto ha incentivado el desarrollo de rutas alternas para el contrabando y ha afectado negativamente tanto al desarrollo nacional como a la seguridad regional. Las iniciativas estatales para controlar esta problemática se han visto superadas por la complejidad del entorno.

Según Fajardo (2017), el contrabando y la economía ilegal generan efectos perjudiciales como el desempleo, la competencia desleal, la pérdida de ingresos fiscales, el aumento de la informalidad y el fortalecimiento del crimen organizado, tanto a nivel nacional como transnacional. Además, este fenómeno impacta negativamente el desarrollo industrial, ya que impone restricciones a la competitividad de las empresas legales.

### **Potencial de integración económica fronteriza**

La Zona de Integración Fronteriza Colombia–Ecuador puede jugar un papel clave en la reactivación económica de la región. La implementación de la Zona de Desarrollo Económico Especial (ZEDE) en la ciudad de Tulcán, por ejemplo, podría dinamizar la economía mediante la generación de empleo, la atracción de inversión y el fortalecimiento de la infraestructura logística (Arana, 2016).

Este tipo de iniciativas fomentan la sustitución de productos terminados por materias primas que alimenten procesos de transformación local. Además, podrían contribuir a reducir los costos logísticos derivados de la diferencia en el tipo de cambio entre ambos países, lo que abriría nuevas oportunidades para transportistas, almacenistas, comerciantes y profesionales de la región. También se anticipa un impacto positivo en el ámbito académico, con universidades locales que podrían integrar estos desarrollos en sus programas, generando así un valor agregado para ambos lados de la frontera.

Asimismo, es importante considerar el emprendimiento productivo como una herramienta para facilitar la reintegración en el contexto del postacuerdo en Colombia, especialmente a partir de experiencias exitosas del sector empresarial ecuatoriano.

### **Crisis humanitaria y discriminación a migrantes colombianos**

En los últimos años, la situación se ha vuelto aún más compleja debido al aumento en la migración venezolana, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en Ecuador (Pugh, 2020). Se estima que más de 240.000 colombianos en Ecuador requieren protección internacional, la mayoría de ellos establecidos en zonas cercanas a la frontera.

Muchos de estos refugiados han sido desarraigados por el conflicto armado colombiano y enfrentan enormes dificultades en su intento por rehacer sus vidas. A menudo

se enfrentan a actitudes xenófobas, discriminación y altos niveles de desconfianza social (Salcedo, 2014). Además, viven en condiciones de pobreza e inseguridad, sin acceso estable a derechos fundamentales como salud, educación y empleo formal, y su situación migratoria irregular los deja en condición de vulnerabilidad frente a la explotación laboral, el abuso y la exclusión. Además, su limitada capacidad para hacer valer sus derechos los convierte en víctimas silenciosas de un sistema que no siempre garantiza su protección.

### **Perspectiva Legal**

La violencia a gran escala contra civiles ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad física de quienes transitan por la frontera colombo-ecuatoriana y sobre la idoneidad de estas zonas para operaciones transfronterizas ilícitas (Idler, 2012). Como signatario de la Convención de Ginebra sobre Refugiados, Ecuador ha asumido compromisos para salvaguardar a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes (Kimberley, 2021). La Constitución ecuatoriana de 2008 garantiza a todos los extranjeros los mismos derechos que a los ciudadanos ecuatorianos y establece que ningún ser humano puede ser considerado ilegal.

No obstante, a pesar de estas garantías constitucionales, incluyendo el acceso gratuito a la educación superior, persisten profundas desigualdades entre las políticas estatales y su aplicación, especialmente hacia los migrantes más vulnerables, como los colombianos afrodescendientes (Donger, 2020). Muchos refugiados reportan que se les niega el acceso a las protecciones laborales garantizadas por la ley (van Teijlingen, 2011), lo que los empuja, en ocasiones, a involucrarse en actividades ilícitas a lo largo de la frontera.

### **Ilegalidad y Seguridad Humana en la Región Fronteriza**

Desde una perspectiva de relaciones internacionales, en la región amazónica fronteriza coexisten dos fenómenos interrelacionados: (1) las dinámicas informales de la vida cotidiana y (2) las prácticas ilegales. La expansión de la ilegalidad amenaza la seguridad de los habitantes fronterizos. Medina et al., (2015) destacan cómo el conflicto armado interno en Colombia influye en las dinámicas transnacionales en Ecuador.

En la región andina, los Estados tienden a actuar de manera unilateral, sin establecer políticas de cooperación binacional, afectando negativamente la seguridad humana. Esta ausencia de coordinación ha derivado en una "esclavización política", donde las respuestas estatales a la actividad ilegal han fracasado. Sin embargo, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas han permitido repensar la consolidación de la autoridad estatal y la construcción de lazos sociales a través de la integración regional, la inclusión social y la gobernanza democrática.

### **Crimen Organizado y Crisis Carcelaria**

La violencia en Ecuador se ha intensificado a raíz de disputas entre bandas criminales por el control de las cárceles y de las rutas del narcotráfico. Los sangrientos enfrentamientos en la penitenciaría de Guayaquil son un ejemplo de este fenómeno (Alexandra, 2021). A pesar de los esfuerzos por promover la paz, persiste la desconexión entre las promesas estatales incumplidas y las nuevas amenazas emergentes. Barrera et al. (2022) señalan que, aunque se han generado formas innovadoras de participación y diálogo socio territorial desde la base, aún no se ha consolidado un enfoque regional que vincule estos elementos de manera efectiva.

### **Perspectiva Ambiental**

Tanto Colombia como Ecuador enfrentan graves desafíos ambientales, agravados por la afluencia masiva de personas provenientes de Venezuela, quienes a menudo son absorbidas por las industrias extractivas y los cultivos ilícitos en condiciones de alta precariedad (Idler, 2019; Barrera et al., 2022). La región amazónica fronteriza, rica en biodiversidad y recursos naturales, se ha visto afectada por la explotación desmedida de estos bienes, incluidos monocultivos como la palma africana y la soja, utilizados para biodiésel.

La militarización colombiana en estas zonas facilita la degradación ambiental al encubrir actividades ilícitas como la producción de coca. Estos procesos, sumados a los efectos del cambio climático, generan impactos severos tanto sobre el ecosistema como sobre las comunidades locales.

Los desplazamientos derivados del deterioro ambiental han dado lugar a la conceptualización del "migrante ambiental", vinculado a factores como la contaminación, los desastres naturales, la sequía y la erosión de suelos. Adger et al. (2021) identifican dos factores clave en la percepción ambiental: la inseguridad relacionada con eventos extremos y la percepción del deterioro progresivo del entorno. Pese a que algunos países han empezado a ofrecer protección legal a los migrantes ambientales, su identificación, evaluación y monitoreo resultan complejos. En Colombia, las deficiencias en las políticas de seguridad ecológica y en los mecanismos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) son evidentes. Toro, Requena y Zamorano (2010) subrayan que la normativa de EIA es ineficaz debido a su limitado alcance, la falta de respaldo administrativo y la escasa participación pública.

### **Gobernanza y Crisis Fronteriza**

El enfoque militar de seguridad ha sido insuficiente frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales de la región. Quiñónez (2022) critica la ausencia de propuestas integrales por parte del gobierno ecuatoriano para el desarrollo fronterizo. En Colombia, la debilidad institucional ha propiciado el mal manejo de las zonas limítrofes. Mouliy, (2015) explica que la distancia de estas zonas respecto a los centros políticos y económicos del Estado, así como su transnacionalidad, las convierte en espacios atractivos para actores armados no estatales.

La pandemia de COVID-19 añadió una capa de complejidad al problema de seguridad, afectando aún más a las poblaciones fronterizas, aunque se propuso un fondo de cooperación binacional, su impacto ha sido limitado (Idler, 2020). Se hace necesario desarrollar estudios que analicen la crisis fronteriza en contextos de pandemia y postpandemia, con un enfoque multidimensional que incluya lo social, económico, político y ambiental.

Los problemas políticos internos de Colombia y Ecuador han exacerbado las crisis migratorias y fronterizas. En ambos países, la centralización del poder ha generado vacíos institucionales que han sido ocupados por organizaciones criminales violentas. Mientras Colombia continúa enfrentando una guerra civil prolongada, Ecuador lidia con el crecimiento exponencial de pandillas.

Una de las principales limitaciones del presente estudio radica en la escasa atención que la literatura científica presta a los países del Sur Global, como Colombia y Ecuador. Además, la dificultad para acceder a datos confiables por razones políticas, restricciones a la investigación o corrupción limita el análisis profundo de estos fenómenos.

## **Conclusiones**

La frontera entre Colombia y Ecuador refleja una convergencia crítica de violencia, ilegalidad y migración forzada. Las deficiencias estatales, la escasa cooperación binacional y la ausencia de estrategias integrales perpetúan la inseguridad humana y permiten la expansión de redes criminales.

A pesar de avances jurídicos en Ecuador, las brechas entre normativa y práctica marginan a los migrantes, especialmente a los afrocolombianos. En este contexto, la paz territorial aún depende del fortalecimiento institucional y de iniciativas sociales locales. Se requiere una articulación regional que aborde la violencia estructural y promueva derechos, integración e inclusión en las políticas públicas fronterizas.

La región amazónica fronteriza entre Colombia y Ecuador enfrenta una crisis ambiental y social agravada por la explotación indiscriminada de recursos, la militarización y los efectos del cambio climático. La falta de evaluación ambiental rigurosa, la débil gobernanza estatal y la ausencia de políticas integradas limitan la respuesta frente a migraciones inducidas por deterioro ecológico.

Aunque existen nociones de protección legal para migrantes ambientales, su implementación es insuficiente. Es urgente adoptar enfoques multinivel de seguridad ecológica que integren la percepción comunitaria del riesgo, fortalezcan el monitoreo ambiental y promuevan justicia ambiental con inclusión social y participación efectiva de las comunidades locales.

Finalmente, el fortalecimiento de la frontera colombo-ecuatoriana exige superar respuestas fragmentadas y apostar por estrategias integrales que combinen seguridad, desarrollo económico y protección social. La cooperación binacional debe priorizar la gobernanza democrática, la inclusión de comunidades locales y la gestión ambiental sostenible. Solo mediante políticas coordinadas, sostenibles y con enfoque humano será posible reducir la violencia, mitigar el impacto del narcotráfico y construir una frontera más estable y resiliente.

## Referencias

- ACAPS. (2023, diciembre 22). Informe temático. <https://www.acaps.org>
- Adger, W. N., Safra de Campos, R., Siddiqui, T. A., & Tapsuwan, S. (2021). Environmental risk, resilience and migration. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2, 404–419. <https://doi.org/10.1038/s43017-021-00162-3>
- Adger, W. N., de Campos, R. S., Ardey Codjoe, S. N., Siddiqui, T. A., Hasegawa, T., Das, S., ... & Awumbila, M. (2021). Perceived environmental risks and insecurity reduce future migration intentions in hazardous migration source areas. *One Earth*, 4(1), 146–157. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.009>
- Alexandra, V. (2021, septiembre 30). Ecuador: enfrentamientos mortales en prisión muestran el poder de las bandas. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/es/news/2021/09/30/ecuador-enfrentamientos-mortales-en-prision-muestran-el-poder-de-las-bandas>
- Alexandra, V. (2021, noviembre 21). Ecuador and Colombia to open shared border from December 1. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-colombia-open-shared-border-dec-1-2021-11-21/>
- Almeida Izurieta, M. J. (2011). Análisis de la crisis Ecuador-Colombia en el período 2008–2010 y sus implicaciones en la política exterior ecuatoriana [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. PUCE.
- Appleby, P., Dalby, C., Doherty, S., Mistler-Ferguson, S., & Shuldiner, H. (2023). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2022. InSight Crime.
- Arana González, B. J. (2016). Diseñar de un modelo de gestión para la reactivación económica fronteriza Colombia–Ecuador [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil].
- Baca, S. M., & Contreras, C. (2011). Las relaciones Ecuador-Colombia en perspectiva comparada. *Comentario Internacional. Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, 11, 67–85. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/comentario/article/view/76>
- Barrera, A. L., Silva, S., & Vallejo, G. (2022). Construcción de paz y dinámicas territoriales en zonas de frontera: Una visión desde la base. Fundación Ideas para la Paz.

- Barrera, V., López-Cardenas, M. B., Staples, H., & Kanai, M. (2022). From local turn to space-relational analysis: Participatory peacebuilding in a Colombian borderland. *Political Geography*, 98, 102729. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102729>
- BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). (2021). Supporting host communities for refugees and migrants in the border regions of Colombia, Ecuador, and Peru (SI FRONTERA). <https://www.giz.de/en/worldwide/77030.html>
- Cajiao, A., & Tobo, C. (2022). La frontera del Clan: Migración irregular y crimen organizado en El Darién. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Calderón-Jaramillo, M., Parra-Romero, D., Forero-Martínez, L. J., Royo, M., & Rivillas-García, J. C. (2020). Migrant women and sexual and gender-based violence at the Colombia-Venezuela border: A qualitative study. *Journal of Migration and Health*, 1–2, 100003. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100003>
- Centro de Migración Mixta. (2023). Quarterly Mixed Migration Update: América Latina y el Caribe, 1er trimestre 2023.
- Clúster de Protección & GIFMM Colombia. (2022, junio). Análisis de protección.
- Country Reports. (2021). Colombia geography. <https://www.countryreports.org/country/Colombia/geography.htm>
- DANE. (2019). Informe población indígena de Colombia. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
- Democracia Abierta. (2021). Four years later, Colombia’s Peace Agreement advances at a snail’s pace. <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/colombia-peace-agreement-advances-snail-pace/>
- Donger, E. (2020). Unequal refugees: Colombian migrants in Ecuador’s constitutional utopia. Center for Global Development Working Paper, 539. <https://www.cgdev.org/publication/unequal-refugees-colombian-migrants-ecuadors-constitutional-utopia>
- Donger, E. (2020). Colombian distress migrants in Ecuador. En J. Bhabha, W. Giles, & F. Mahomed (Eds.), *A better future: The role of higher education for displaced and marginalised people* (pp. 223–244). Cambridge University Press.

- Duvisac, S. (2022, diciembre 12). Una política migratoria basada en la “disuasión” aumenta el riesgo de violencia de género. Oxfam Politics of Poverty. <https://politicsofpoverty.oxfamamerica.org>
- Ecuador Chequea. (2023, junio 9). Crisis carcelaria en Ecuador deja más de 400 muertes en 4 años. <https://www.ecuadorchequea.com/crisis-carcelaria-en-ecuador-deja-mas-de-400-muertes-en-4-anos/>
- El Espectador. (2022, octubre 25). Una frontera caliente, lo que sucede entre Colombia y Ecuador. <https://www.elespectador.com/mundo/america/una-frontera-caliente-lo-que-sucede-entre-colombia-y-ecuador/>
- El Universo. (2022, septiembre 5). El tráfico de migrantes tiene en alerta a la frontera entre Colombia y Ecuador. <https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/el-trafico-de-migrantes-tiene-en-alerta-a-la-frontera-entre-colombia-y-ecuador-nota/>
- El Tiempo. (2023, junio 13). Los tentáculos del Tren de Aragua y otras bandas venezolanas en Colombia. <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/los-tentaculos-del-tren-de-aragua-y-otras-bandas-venezolanas-en-colombia-778429>
- Fernández, M., & Borja, A. (2019). Las comunidades de acogida en la frontera norte del Ecuador: Entre el olvido y la criminalización. *Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción de Riesgo de Desastres*, 3, 90–112.
- FIP (Fundación Ideas para la Paz). (2022). ¿Qué pasa en Tumaco? Las claves para entender la crisis humanitaria en este municipio del Pacífico nariñense.
- GIFMM Colombia. (2022). Refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. <https://www.r4v.info/es/operaciones/gifmm-colombia>
- Gobierno de Colombia, & OIM. (2022). Caracterización de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela: Tendencias y dinámicas en Colombia y Ecuador.
- Gobierno de Ecuador. (2021). Plan nacional de desarrollo 2021–2025.
- Guerrero, R., & López, A. (2021). Las amenazas a la seguridad y soberanía en la frontera norte del Ecuador. *Revista de la Universidad de la Policía Nacional del Ecuador*, 10, 55–68.

- Guerrero Salas, J. P. (2021). Redes de crimen organizado transnacional en la frontera colombo-ecuatoriana. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(32), 473–499. <https://doi.org/10.21830/19006586.794>
- Guerrero Salas, J. P. (2021). Análisis geopolítico de la seguridad fronteriza en la zona de integración fronteriza colombo-ecuatoriana. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 16(1), 75–97. <https://doi.org/10.18359/ries.5140>
- Guerrero Salas, J. P., & Erazo Espinosa, D. M. (2021). Incidencia de la economía ilegal en la seguridad regional: Frontera Colombo-Ecuatoriana. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(34), 607–628. <https://doi.org/10.21830/19006586.867>
- Guerrero Salas, J. P., Erazo, D. M., & Muñoz, J. D. (2021). Una aproximación geopolítica a la seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador. *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 7(2), 143–162. <https://doi.org/10.18847/1.9.2.6>
- Hernández Delgado, C. M. (2021). Narcotráfico y seguridad en la frontera Ecuador–Colombia: Dinámicas del crimen organizado transnacional. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(33), 407–432. <https://doi.org/10.21830/19006586.832>
- Herrera, J. (2008). La investigación cualitativa. Obtenido de <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1167>.
- IACHR (Inter-American Commission on Human Rights). (2023). Report on the Human Rights Situation in the Northern Border of Ecuador.
- Idler, Annette. 2012. "Exploring Agreements of Convenience Made Among Violent Non-State Actors." *Perspectives on Terrorism* 6 (4–5): 63–84. <http://www.terrorismanalysts/>
- IOM & R4V. (2022). Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes: Un análisis sobre el contexto actual de la movilidad humana en Colombia y Ecuador.
- IOM. (2022). Report on mobility tracking: Colombia–Ecuador border.
- Jaramillo Jassir, M. (2021). La frontera colombo-ecuatoriana: Espacio de oportunidad y riesgo. *Revista Ópera*, 29, 107–124. <https://doi.org/10.18601/16578651.n29.06>
- Lozano, L. (2021). Los retos de la política exterior ecuatoriana frente al proceso de paz en Colombia. *Revista Ecuatoriana de Ciencia Política*, 10(1), 45–68. <https://doi.org/10.33171/rpr.v10n1.2021.5>

- Maldonado, D. A. (2022). La respuesta de Ecuador al éxodo venezolano. *Revista Migraciones Internacionales*, 12(1), 45–70. <https://doi.org/10.17428/rmi.v12i1.1237>
- Martínez, S., & García, A. (2020). La cooperación Colombia–Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. *Revista de Estudios Internacionales*, 197, 45–65.
- Martínez, C. A., & Rodríguez, M. A. (2022). Violencias, fronteras y migraciones: Una mirada desde el Pacífico sur colombiano. *Revista de Estudios Sociales*, 80, 20–35. <https://doi.org/10.7440/res80.2022.03>
- Migración Colombia. (2023). Estadísticas migratorias. <https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias-y-estadisticas>
- Ministerio de Defensa del Ecuador. (2021). Plan Estratégico de Seguridad Fronteriza 2021–2025.
- Nieto Matiz, C. A. (2020). Geopolítica de la migración venezolana: Una aproximación desde la frontera Colombo-Ecuatoriana. *Revista de Geografía Norte Grande*, 75, 133–152. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022020000200133>
- OEA (Organización de los Estados Americanos). (2022). Informe sobre seguridad regional en América Latina y el Caribe.
- ONU Colombia. (2022). Situación humanitaria en zonas de frontera: Informe de monitoreo.
- ONU Ecuador. (2023). Informe sobre la situación de derechos humanos en la frontera norte.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2023). Informe de movilidad humana en la frontera Colombia-Ecuador.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2022). Caracterización de flujos migratorios mixtos en la frontera norte de Ecuador.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM) & ACNUR. (2021). Refugiados y migrantes venezolanos: Respuesta regional en América Latina y el Caribe.
- Padilla, M. (2021). Las redes del narcotráfico en la frontera Colombia-Ecuador: Desafíos para la seguridad. *Revista de Estudios Estratégicos*, 17, 25–44.

- Pardo, R. (2021). La seguridad humana en contextos fronterizos: El caso de la frontera sur de Colombia. *Revista Seguridad y Defensa Hoy*, 8(2), 55–74.
- Ramírez, S. (2020). Las disidencias de las FARC y el crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriana. *Análisis Político*, 33(99), 78–95. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90679>
- Red Humanitaria de Pasto. (2022). Boletín mensual de alertas sobre movilidad humana en frontera sur.
- Roa, S. (2023). El crimen organizado transnacional en la frontera colombo-ecuatoriana: Retos para la gobernanza. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, 134, 71–90.
- Rodríguez, J. F., & Torres, L. A. (2021). Estrategias de cooperación binacional en la frontera Colombia-Ecuador frente al narcotráfico. *Revista Relaciones Internacionales*, 45(1), 101–120. <https://doi.org/10.24201/rel.v45i181.4523>
- Rueda, M. A. (2022). Frontera colombo-ecuatoriana: Zona de paso, zona de riesgo. *Revista Internacional de Estudios de Paz y Conflictos*, 19(2), 55–72.
- Sánchez, C. A., & Pérez, D. M. (2021). Migración forzada venezolana en Ecuador: Impactos y respuestas institucionales. *Revista Latinoamericana de Población*, 15(28), 93–115. <https://doi.org/10.31406/relap2021.v15.i1.n28.5>
- Schettini, P., Cortazzo, I. (2016). Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/53686>.
- UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). (2022). Colombia–Ecuador Border Situation Report.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2021). Crimen organizado transnacional en América Latina: Informe regional.
- Vallejo, L. F. (2022). Cooperación Colombia-Ecuador frente a la trata de personas: Avances y desafíos. *Revista Latinoamericana de Derecho Internacional*, 18(2), 133–154.
- Vásquez, J. A. (2023). Criminalidad organizada y seguridad fronteriza en América Latina: El caso de Colombia y Ecuador. *Revista Criminalidad*, 65(1), 95–112.

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia

Vera, C., & Morales, L. (2021). Gobernanza de la migración en la frontera Ecuador–Colombia.  
Revista Andina de Estudios Internacionales, 6(1), 59–7

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia